

## **Tratamiento de datos de víctimas del terrorismo. Informe 057/2006**

La consulta plantea la procedencia de exigir en la convocatoria anual de subvenciones para la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo, la aportación, contenida en la convocatoria referida al último ejercicio, de una relación nominal de víctimas, con indicación de si se trata de víctimas directas o familiares y, en este caso, su grado de parentesco con la víctima.

Con carácter previo a la resolución de la consulta planteada, debe recordarse que las ayudas referidas traen causa de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, en la que, además de regularse las ayudas directas a las propias víctimas, se disponía que “La Administración General del Estado podrá, en los términos y condiciones que se determinen en las normas de desarrollo, conceder subvenciones a las asociaciones cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo”.

En su desarrollo, el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, regulaba en su Capítulo VI estas subvenciones, exigiendo para que las entidades pudieran tener la condición de beneficiarios en su artículo 34.2 c) “Acreditar el alcance de su representatividad dentro del colectivo de víctimas por terrorismo y la capacidad de desarrollo de la actividad para la que se demanda la subvención”. No obstante, el artículo 37 no establecía el modo en que dicho requisito habría de acreditarse, limitándose a exigir en su apartado g) la aportación de la documentación acreditativa del requisito.

La Orden INT/744/2005, de 18 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo, a la que se refiere la consulta, no establece tampoco el modo en que deberá acreditarse el citado requisito, recogido en el punto c) de su apartado quinto. Al propio tiempo, como indica la consulta, la representatividad de la entidad es incluida entre los criterios de valoración, previstos en su apartado séptimo.2.

No obstante, es la Orden INT/1625/2005, de 24 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria, la que señala que la acreditación de la representatividad de la asociación deberá efectuarse “de acuerdo con el Anexo II”, en que se indica la necesaria constancia del requisito al que venimos refiriéndonos.

Entrando ya en el estudio de la aplicación de las normas de protección de datos, la transmisión por parte de los solicitantes de las subvenciones de los datos a los que se refiere la relación nominal incluida en el Anexo II de la convocatoria correspondiente al año 2005 constituye una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter

Personal, como “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

Respecto de las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, el artículo 11.2 a) permite exceptuar el consentimiento del afectado en caso de que exista una norma con rango de Ley que otorgue cobertura a la cesión planteada.

Al propio tiempo, aún cuando la Ley no define el concepto de víctimas del terrorismo, es claro que en un gran número de supuestos la condición de víctima llevará implícita la existencia de un dato de salud asociado a la misma, habida cuenta de las consecuencias derivadas de la realización del acto terrorista. En este sentido, baste recordar las ayudas establecidas en la Ley 32/1999, de 8 de octubre o las establecidas en el propio Reglamento al que nos hemos referido.

Igualmente, la Orden INT/2662/2004, de 29 de julio prevé el tratamiento de datos de salud en los dos ficheros regulados por la misma, de “afectados por el terrorismo” y “asister” que, no obstante, no guardan relación con el supuesto ahora analizado, dado que ambos se refieren a los procedimientos de concesión de ayudas directas a las víctimas, y no de los procedimientos de subvención ahora analizados.

En relación con los datos de salud, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que los mismos únicamente podrán ser objeto de tratamiento “cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”.

Dicho lo anterior, debe ahora analizarse la doctrina emanada de esta Agencia en relación con otros supuestos que guardan cierta semejanza con el ahora planteado.

Así, en primer lugar, en informe de 13 de junio de 2005 se analizó el supuesto de cesión de datos de miembros de una determinada asociación para la obtención de una ayuda pública. Es preciso señalar que el tratamiento de estos datos no implicaba, como puede implicar en el presente caso, la existencia de un dato relacionado con la salud de las personas ni ningún otro dato de carácter especialmente protegido.

En el citado informe se señalaba lo siguiente:

*“Tratándose de una subvención otorgada por un Ayuntamiento, resultará de aplicación a la misma lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en virtud de lo dispuesto en su artículo 2.2 b).*

*Según indica el artículo 22 de la Ley 38/2003, “la iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según lo establecido en este capítulo y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y tendrá necesariamente el siguiente contenido: (...) e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos”.*

*Al propio tiempo, el artículo 17 de la Ley establece los requisitos que habrán de tener las bases de la concesión de la correspondiente subvención.*

*De este modo, si la convocatoria de la subvención y las bases establecieran como requisito para la obtención de la subvención el conocimiento de la relación efectiva de miembros de la correspondiente asociación, podría considerarse amparada la comunicación de los datos en lo dispuesto en los mencionados preceptos, en relación con el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.*

*No obstante, para que ello fuese posible sería asimismo necesario que la exigencia de los datos concretos de los asociados cumpliera el principio de proporcionalidad, previsto en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo tenor “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.*

*De este modo, para que la cesión fuese conforme a la Ley Orgánica sería necesario que el conocimiento de los datos referidos a los concretos asociados fuera imprescindible para la obtención de la subvención, de forma que no bastase para ello el mero conocimiento y certificación del número de asociados u otra variable similar.”*

Por otra parte, en informe de 16 de marzo de 2004 en que una norma autonómica planteaba la necesidad de aportación de datos relacionados con la salud de alumnos que cursaban estudios en centros sometidos a un régimen específico de concierto con la consejería correspondiente, se indicó por esta Agencia Española de Protección de Datos lo siguiente:

*“Dicho esto, según dispone el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, “Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”. En consecuencia, los datos a los que se refiere la consulta sólo podrían comunicarse en caso de que así se hubiera consentido por los propios alumnos o su representante legal o cuando una Ley lo dispusiera, siendo así que del texto de la Disposición*

*objeto de este informe no se desprende la existencia de dicha norma habilitadora de la comunicación de estos datos.*

*Por este motivo, la comunicación prevista no encontraría amparo en lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 a menos que una norma con rango de Ley dé cobertura a la misma, no siendo tampoco admisible la solicitud basada en una mera atribución genérica de competencias a la Consejería consultante para considerar válidamente efectuada la transmisión de los datos.*

*No obstante, sí resultaría admisible la transmisión de los datos previamente sometidos a un procedimiento de disociación, definido por el artículo 3 f) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable”. De este modo, la Administración solicitante podría tener conocimiento de los datos que permitan conocer las necesidades educativas sin que se transmitieran datos que permitieran asociar las distintas minusvalías o trastornos con personas identificables.”*

La doctrina derivada de los dos informes que se acaban de reproducir resulta relevante para la resolución de la cuestión planteada en el presente momento, dado que lo que aquí se plantea es si procede la cesión de los datos nominales de los miembros de una asociación, fundación o entidad de otra naturaleza que, por otra parte, pueden implicar una revelación sobre su salud, por ostentar la condición de víctima del terrorismo.

Al propio tiempo, debe tenerse en cuenta que la inclusión de la relación nominal de miembros de la entidad solicitante de la ayuda sólo aparece exigida terminantemente en la convocatoria de las ayudas correspondiente al año 2005, limitándose a exigir las bases de la subvención que se acredite el requisito de la representatividad de la solicitante, lo que, en principio puede lograrse mediante la certificación del número de miembros y su condición, sin necesidad de acudir a la relación nominal de los mismos. Todo ello, sin perjuicio del ejercicio, cuando corresponda, de las competencias de investigación y control previstas en la Ley General de Subvenciones en relación con supuestos concretos.

Pues bien, teniendo en cuenta lo que se ha venido señalando, cabría considerar que el principio de proporcionalidad consagrado por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 quedaría garantizado en mayor medida en caso de que la acreditación del requisito de representatividad exigida por el Reglamento y las bases de la subvención pudiese acreditarse mediante la certificación por la entidad solicitante de las ayudas de la condición de sus miembros, con indicación de los que tienen la condición de víctimas y del grado de parentesco con aquéllas, en caso de familiares, pero sin la inclusión de una relación nominal de los asociados o pertenecientes a la entidad solicitante.

En consecuencia, se considera que sería más acorde a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 la supresión en la próxima convocatoria de las ayudas

del requisito contenido en la letra c) del apartado sexto de la Orden INT/1625/2005, de 25 de mayo, reemplazando ese requisito por la certificación por los órganos representativos de la entidad solicitante del número de víctimas pertenecientes a la misma, con indicación de las que son víctimas directas o familiares y el grado de parentesco de éstos con la víctima, pero sin la inclusión de una relación nominal de las mismas.